



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	YIMI MAURICIO YEPES ATEHORTUA
DEMANDADO:	TRANSPORTES METROENTREGA S.A
RADICADO:	05360 31 05 001 2018 00178 01
ACTA N°:	78

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud del recurso de apelación de la demandada, en el proceso promovido por el señor **YIMI MAURICIO YEPES ATEHORTUA** en contra de la empresa **TRANSPORTES METROENTREGAS S.A**, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Itagüí finalizó la primera instancia.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 78** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

El señor YEPES ATEHORTUA instauró demanda con la que pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo a término fijo desde el 11 de febrero de 2013, y luego uno a término indefinido desde el 27 de junio de 2014 y hasta el 15 de abril de 2018, teniendo como ineficaz el despido efectuado por la empresa en esta última fecha al encontrarse protegido por la estabilidad laboral reforzada. Como consecuencia de lo anterior, se condene al reintegro, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y que se cancelen sendos créditos laborales.

Para sustentar sus pretensiones afirmó que se vinculó a la demandada para desempeñar el cargo de auxiliar de bodega el 11 de febrero de 2013 a través de contrato a término fijo y posteriormente, el 27 de junio de 2014, suscribió contrato a término indefinido. Indica que desde 2015 fue diagnosticado con múltiples enfermedades que deterioraron su salud y le impidieron desempeñar sus labores;

¹ Páginas 4 a 14 del expediente digital, folios 2 a 12. Presentada el 15 de junio de 2018; subsana demanda de páginas 58 a 61, folios 40 y 41.

expone que estuvo incapacitado entre 2013 y 2016, hasta obtener dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral que determinó un porcentaje de 39.90% con fecha de estructuración del 11 de mayo de 2016. Pese a que la sociedad tenía conocimiento de esta situación, fue despedido el 15 de abril de 2018 sin justa causa².

1.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar la demanda³, METROENTREGAS S.A indicó sobre los hechos que no le constaban, que debía definirse judicialmente si el despido era justo o no; que en atención al proceso liquidatorio que afronta deben estudiarse compensaciones como indemnizaciones y que en todo caso, el proceso de liquidación da prelación a los créditos laborales. Se opuso a las pretensiones, en especial a la continuación del vínculo laboral y al pago de las prestaciones sociales excluyentes en relación a la pretensión de reintegro.

1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia del **26 de junio de 2019**⁴, la Juez ordenó el reintegro del trabajador y le impuso a la demandada el pago de los salarios adeudados hasta la fecha de la sentencia, la indemnización de la Ley 361 de 1997, el pago de los derechos laborales al 31 de diciembre de 2018 y los causados del 1 de enero de 2019 hasta el reintegro con los respectivos aportes a la seguridad social, la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y las costas.

Para fundamentar su decisión razonó de la siguiente manera: Del contrato de trabajo estudió la existencia de dos contratos, el último bajo la modalidad de término indefinido del que analizó la ausencia de pago de conceptos de prestaciones sociales y vacaciones, accediendo a la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por las cesantías del 2018.

Luego se ocupó de la terminación del contrato, adujo que fue ilegal dada la pérdida de capacidad laboral de nivel severo, la utilización de bastón y las restricciones laborales del actor que eran conocidas por el empleador, siendo pertinente el reintegro bajo la implementación de medidas necesarias para adaptar el puesto de trabajo, pues el empleador no acudió a la autoridad competente para solicitar la autorización de despido al tenor de lo expuesto por la CSJ en sentencia de radicado 39207, SL 10539 de 2016 y SL 5163 de 2017.

² La demanda fue admitida con auto del 11 de julio de 2018; Páginas 62 y 63 del expediente digital, folio 42.

³ 12 de febrero de 2019; la demandada pone de presente que previamente se inició proceso de liquidación judicial bajo el régimen de insolvencia, haciendo referencia a autos del 15 de noviembre y 10 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Sociedades. A la apoderada que contesta la demanda se le otorgó poder por parte del liquidador de la sociedad.

⁴ Acta de audiencia. Páginas 198 a 202 del expediente digital; folios 135 a 137.

Sobre el reintegro, indicó que la empresa se encontraba en proceso liquidatorio, aun subsistiendo, por lo que era procedente el reintegro del actor a un cargo compatible con su discapacidad, quedando la relación laboral sin solución de continuidad desde el 16 de abril de 2018. Ordenó el pago de las sumas adeudadas hasta diciembre de 2018 (Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, pagos de la seguridad social) y luego los derechos laborales causados del 1 de enero de 2019 hasta el reintegro; no reconoció los dominicales y festivos. Accedió a la indemnización de 180 días de salario, negó la sanción moratoria advirtiendo que la sociedad inmersa en un proceso de liquidación no tiene interés de desconocer los derechos de los trabajadores, como lo entendió la CSJ en SL 2833 de 2017. Finalmente, condenó en costas a la demandada.

1.4. DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEMANDADA

Frente a esta decisión, la apoderada de la demandada interpuso recurso de apelación única y exclusivamente respecto a la orden de reintegro del trabajador, insistiendo en lo siguiente: La sociedad se encuentra en liquidación y sus capacidades se centran en los actos de liquidación según el Código de Comercio, por lo que es imposible jurídicamente que se ordene el reintegro, más cuando el liquidador se encuentra en el proyecto de reconocimiento, graduación y calificación de créditos. Solicita así que el reintegro se traduzca en una condena en dinero, ante la imposibilidad física de cumplir con aquel.

2. TRAMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del 8 de abril de 2021 se corrió traslado a las partes para que formularan alegatos de conclusión previo a dictar sentencia en esta instancia, sin embargo, las partes no intervinieron.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación y por esta razón, el problema jurídico a analizar en esta oportunidad se contrae a determinar si en este caso resulta procedente ordenar el reintegro del demandante a pesar de que TRANSPORTES METROENTREGAS S.A se encuentre en liquidación.

3. CONSIDERACIONES.

Pues bien, para efectuar el análisis, es pertinente partir de las siguientes premisas:

En primer lugar, no se discute que el señor YEPES ATEHORTUA estuvo vinculado a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A inicialmente con contrato de trabajo a término fijo desde el 11 de febrero de 2013, el que luego se modificó el 27 de junio de 2014 a un

contrato a término indefinido, que finalizó por decisión unilateral del empleador el 15 de abril de 2018.

En segundo lugar, es claro que la recurrente no cuestiona la decisión de la sentencia referida a que el actor es beneficiario de la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y por lo tanto, titular de la protección que el legislador consagró para los sujetos que son despedidos con en esa condición. La recurrente concentra su en que físicamente es imposible cumplir con la condena referida al reintegro, porque la sociedad se encuentra inmersa en un proceso de liquidación.

En efecto, sobre la liquidación se encuentra en el plenario lo siguiente:

- Certificado de existencia y Representación legal de TRANSPORTES METROENTREGAS S.A en liquidación judicial, que data del 19 de junio de 2019⁵.
- Auto del 15 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Sociedades en el que se declara la apertura de liquidación judicial de los bienes de la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A; en la misma providencia se designó liquidador de la sociedad concursada y se establecieron los pasos a seguir en el trámite de liquidación⁶.
- Acta de posesión del liquidador en el trámite adelantado ante la Superintendencia⁷.

Consultada la *Baranda virtual* de la Superintendencia de Sociedades⁸ en el proceso liquidatorio de referencia, se encontró auto del 21 de octubre de 2019 que aprueba el informe final de liquidación de cuentas de gestión presentado por el liquidador y declara terminado el proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad, ordenándosele a la Cámara de comercio que proceda a cancelar la matrícula mercantil⁹.

Pues bien, se verifica entonces por esta corporación que para el momento en que se profirió la decisión de primera instancia el **26 de junio de 2019**, la orden de reintegro del trabajador se sustentó en que la sociedad todavía tenía vida jurídica dado que no había terminado el proceso liquidatorio. Sin embargo, se advierte con claridad la existencia de un hecho sobreviniente, pues para el momento de emitir esta decisión se ha concluido el trámite liquidatorio haciendo imposible el reintegro, por lo que deberá

⁵ Páginas 165 a 173 del expediente digital; folios 106 a 114.

⁶ Páginas 155 a 162 del expediente digital; folios 97 a 104.

⁷ Páginas 163 a 164 del expediente digital; folio 105.

⁸ <https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/procesos#verpdf>, atendiendo a que el NIT de TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL, según Certificado de Existencia de Representación antes relacionado es 800013166.

⁹ ANEXO de la Sentencia.

revisarse en qué términos debe proferirse la condena, tal y como lo solicitó la apoderada recurrente.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha adoctrinado:

En efecto, para que sea factible la reinstalación de un empleado, es imprescindible que la entidad a la cual va a ser reincorporado exista físicamente, pues es un ilógico pretender la reubicación a una entidad que, sencillamente, ha desaparecido material y jurídicamente, como acá ocurre en virtud del certificado mercantil adosado al juicio y al cual la Sala le atribuye plena eficacia para demostrar la liquidación total de la EADE.

En el derecho de las obligaciones, el tema de la «imposibilidad sobrevenida» ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina autorizada, en el sentido que en las hipótesis de imposibilidad sobrevenida y definitiva del débito primario (reintegro), procede «el equivalente pecuniario de este: perpetuatur obligatio en la aestimatio pecunia (art. 1731 c.c.)»¹⁰. Lo que significa que de no ser posible el cumplimiento de la obligación in natura, por ejemplo, por extinción de la entidad en la cual debía ser reintegrado un trabajador, procede la entrega de un subrogado pecuniario, que de una u otra forma satisfaga el derecho del trabajador.

El tema en cuestión no ha sido ajeno a la jurisprudencia de esta Corporación, como puede verse en la sentencia CSJ SL, 30 abr. 1998, rad. 10425:

«El Tribunal acierta cuando sostiene que el cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro, porque esa es una verdad axiomática. Más aún, para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible.¹¹

Al no acceder a la pretensión de reintegro, debe procederse a la indemnización económica para compensar los derechos del trabajador, en los términos ya tratados por la jurisprudencia de la Corte Suprema con fundamento en el criterio de la Corte Constitucional¹²:

Por ello y en aras de garantizar la materialidad del derecho a la justicia efectiva, la Sala, en reemplazo del aludido reintegro y a título compensatorio, considera procedente disponer el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación del demandante hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso.

En este caso, nos encontramos que el actor fue desvinculado el **15 de abril de 2018** según carta de terminación del contrato¹³ y es a partir del día siguiente que debe ordenarse el reconocimiento de los salarios dejados de percibir con su correspondiente indexación, así como el pago de prestaciones sociales también indexadas y cotizaciones a la seguridad social integral hasta el **21 de octubre de 2019**, que es la fecha en que culminó el proceso liquidatorio de la sociedad.

¹⁰ HINESTROSA Fernando: *Tratado de las Obligaciones*. Universidad Externado de Colombia. 3ª Edición. Pág. 779

¹¹ Sentencia **SL 19441 de 2017**, que cita la tesis de **SL 8155 de 2016**, reiterada además en **SL 4566 de 2017**.

¹² En sentencias como T-360 de 2007 y T-550 de 2000.

¹³ Página 29 del expediente digital; folio 21.

La Juez calculó las sumas a pagar por el año 2018 e incluyó los salarios del año 2019 hasta la sentencia, ordenando a la empresa hacer el cálculo por los demás conceptos de 2019 y **hasta el reintegro**. Sin embargo, de acuerdo a lo estudiado, en tanto hay una imposibilidad física para realizar el reintegro lo que procede es una indemnización económica para compensar los derechos del trabajador.

Así cosas, se accederá a los pedimentos del recursos para MODIFICAR la decisión y se dispondrá sobre las sumas a pagar¹⁴, tomando el valor del **salario mínimo de cada anualidad**¹⁵ y como fecha de terminación aquella en que culminó la liquidación de la sociedad: **21 de octubre de 2019**¹⁶:

- Salarios del 16 de abril al 31 de diciembre de 2018: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$6.640.557)**.
- Cesantías del 16 de abril al 31 de diciembre de 2018¹⁷: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$553.380)** cuyos intereses son **CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$47.037)**¹⁸.
- Prima del primer semestre de 2018 (16 de abril al 30 de junio): **CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$162.759)**.
- Prima del segundo semestre de 2018: **TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$390.621)**.
- Salarios del 1 de enero al 21 de octubre de 2019: **OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$8.032.725)**.
- Cesantías del 1 de enero al 21 de octubre de 2019¹⁹: **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$669.394)** y **SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$64.931)** por intereses²⁰.
- Prima del primer semestre de 2019: **CUATROCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$414.058)**.
- Prima del segundo semestre de 2019 (1 de julio al 21 de octubre): **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$255.336)**²¹.

¹⁴ **ARTÍCULO 283. CONDENA EN CONCRETO. [...]** El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.

¹⁵ El salario mínimo para 2018 era de \$781.242; y el de 2019 era de \$828.116.

¹⁶ **ARTÍCULO 284. ADICIÓN DE LA CONDENA EN CONCRETO. [...]** La actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario, en el lapso comprendido entre la fecha de la sentencia definitiva y el día del pago, se hará en el momento de efectuarse este.

¹⁷ Partiendo de 225 días laborados en esa anualidad.

¹⁸ Por 2018 le corresponden intereses equivalentes al 8,5%.

¹⁹ Teniendo para ello 291 días laborados.

²⁰ Por 2019 le corresponden intereses equivalentes al 9,7%.

²¹ Aplicándose la fórmula de salario devengado para cada anualidad por días laborados dividido entre 360. Para la PRIMA I de 2018 se tienen 75 días laborados; para la PRIMA II de esa misma anualidad 180 días; luego para la PRIMA I de 2019 se tienen 180 días y finalmente para la II de 2019 111 días laborados.

- Finalmente, por la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$4.678.452)**²².

De igual forma, **se ordenará** la **INDEXACION** de las condenas proferidas que se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que ello no implica en manera alguna el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que este crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación (**SL 359 -2021**).

Así se ordenará a la sociedad calcular la indexación de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios **al momento del pago de la obligación**:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente **a la fecha de la causación de cada concepto**

VALOR A INDEXAR que se refiere al **monto de cada concepto**

Las cotizaciones en pensiones deberán hacerse en la AFP a la cual se encuentre vinculado el actor, teniendo como IBC el salario mínimo para cada anualidad y desde el **16 de abril de 2018** hasta el **21 de octubre de 2019**.

Además, se condena a la INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO, atendiendo a que el contrato del actor era a término **indefinido** suscrito el **27 de junio de 2014**²³ con fecha de terminación **21 de octubre de 2019** (fecha de liquidación de la entidad);

²² Según el salario mínimo para 2018, el día laboral equivalía a \$26.041, por lo que 180 días de indemnización corresponden a \$4.687.452.

²³ Página 17 del expediente digital; folio 14.

indemnización que asciende a la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$3.212.538)**²⁴, que deberá indexarse en los términos antes indicados.

Al haber salido avante el recurso de apelación, no se causan costas en esta instancia, en los términos del artículo 365 del CGP.

4. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí pero con las siguientes MODIFICACIONES:

A LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO: Se CONDENA a TRANSPORTE METROENTREGAS S.A al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones dejadas de percibir, desde el **16 de abril de 2018** y hasta el **21 de octubre de 2019**, así:

- Salarios del 16 de abril al 31 de diciembre de 2018: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$6.640.557).**
- Cesantías del 16 de abril al 31 de diciembre de 2018: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$553.380)**, cuyos intereses son **CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$47.037).**
- Prima del primer semestre de 2018 (16 de abril al 30 de junio): **CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$162.759).**
- Prima del segundo semestre de 2018: **TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$390.621).**
- Salarios del 1 de enero al 21 de octubre de 2019: **OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$8.032.725).**
- Cesantías del 1 de enero al 21 de octubre de 2019: **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$669.394)** y **SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$64.931)** por intereses.
- Prima del primer semestre de 2019: **CUATROCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$414.058).**

²⁴ Teniendo en cuenta que el salario mínimo en 2019 era de \$828.116, esto es \$27.603 por día y que el actor tenía derecho a **116,38** días de indemnización, en los términos del artículo 64 del CST: **30 días** por el primer año -2014- y 20 días por los años siguientes – de 2015 a 2019, que suman **80 días**-, con una fracción adicional por los 115 días laborados entre el 28 de junio de 2019 y el 21 de octubre de la misma anualidad, equivalente a **6,38 días** de indemnización.

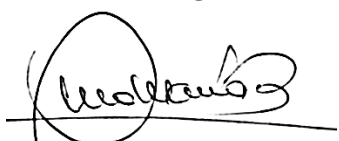
- Prima del segundo semestre de 2019 (1 de julio al 21 de octubre): **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$255.336).**
- Indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$4.678.452).**
- Indemnización por despido sin justa causa: **TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$3.212.538)**
- La indexación de todas las sumas, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

AL NUMERAL QUINTO: Se condena a la sociedad TRANSPORTE METROENTREGAS S.A, a efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Las cotizaciones en pensiones deberán hacerse en la AFP a la cual se encuentre vinculado el actor, teniendo como IBC el salario mínimo para cada anualidad, por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2018 y hasta el 21 de octubre de 2019.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notifica por EDICTO, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
SIN FIRMA CON JUSTIFICACIÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 05360 31 05 001 2018 00178 01

SENTENCIA del // 21/10/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Escuro-WlxZMrkNFLHWJbC4BAb70A5HK8WSfBpc63Xwt4g?e=UmFHbK



Al contestar cite el No. 2019-02-021872

Tipo: Salida Fecha: 21/10/2019 03:31:55 PM
Trámite: 17045 - TERMINACIÓN DEL PROCESO
Sociedad: 800013166 - TRANSPORTES METROE Exp. 89440
Remitente: 610 - INTENDENCIA REGIONAL DE MEDELLÍN
Destino: 800013166 - TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN L
Folios: 4 Anexos: NO
Tipo Documental: AUTO Consecutivo: 610-002294

AUTO
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL MEDELLÍN

Sujeto del proceso

Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial

Proceso

Liquidación Judicial

Liquidador

John De Jesús Suaza Chalarca

Asunto

Aprueba rendición final de cuentas y decreta la terminación del proceso

Expediente

89440

ANTECEDENTES

Mediante escrito con radicado 2019-02-018578 del 2 de septiembre de 2019, el doctor John De Jesús Suaza Chalarca, en calidad de Liquidador de la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial**, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 65 de la Ley 1116 de 2006, remite la rendición final de cuentas con corte al 30 de agosto de 2019.

De este escrito, se corrió traslado número 610-000332 entre los días 5 de septiembre y 2 de octubre de 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1116 de 2006.

Con escrito radicado bajo el número 2019-02-020932 de 2 de octubre de 2019, el apoderado de Colpensiones, presentó objeción a la rendición de cuentas, la cual se puso en conocimiento al liquidador mediante auto 610-002193 de 4 de octubre de 2019 con el fin de que se pronunciara frente a dicha objeción.

Con memorial 2019-02-021227 del 8 de octubre de 2019, el auxiliar de la justicia dio respuesta al auto 610-002193 antes citado.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

1. De la objeción presentada por Colpensiones

El objetante manifestó que a la fecha la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial**, sigue presentando deuda real por \$866.510 y deuda presunta por \$18.137.176 la cual es objeto de depuración y solicita se inste al liquidador de la sociedad a depurar los valores relacionados en el estado de cuenta aportado.

El auxiliar de la justicia, en su escrito con radicado 2019-02-021227 de 8 de octubre de 2019, aporta copia de la comunicación dirigida al apoderado de Colpensiones en cual le da respuesta sobre la solicitud de depuración a la cuenta.

Consideraciones



Este Despacho desestima la objeción, pues la controversia referente al pago de obligaciones y/o depuración de la deuda, es propio de la etapa de la aprobación la calificación y graduación de créditos y gastos de administración de la liquidación, etapas procesales precluidas con la ejecutoria del auto dictado en audiencia según Acta 610-000296 de 22 de agosto de 2019, decisiones a las que deberá estarse el objetante.

Así mismo, advierte el Despacho, que la obligación de depuración recaía expresamente en cabeza del apoderado de Colpensiones y del auxiliar de la justicia en la etapa correspondiente.

2. Respetto de la Rendición Final de Cuentas

Revisado el expediente respectivo, así como la rendición de cuentas finales de la gestión del liquidador, el Despacho considera oportuno registrar el siguiente análisis:

- Los estados financieros a 30 de agosto de 2019 y las afirmaciones contenidas en ellos, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad de la sociedad, y los mismos fueron preparados de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otros la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes.
- Los estados financieros allegados se encuentran suscritos por un profesional de la contaduría conjuntamente con el liquidador.
- Revela el informe final de cuentas del liquidador la ejecución de la adjudicación de bienes de la sociedad concursada.
- Dado que los estados financieros presentados como parte integral del informe de rendición de cuentas finales de gestión del liquidador con corte a 13 de febrero de 2019, están certificados por un profesional de la contaduría pública, este Despacho entiende con esta refrendación que se han tenido en cuenta todos los aspectos fiscales inherentes a las sociedades en liquidación.
- El Despacho entiende cumplido el objeto del proceso de liquidación habida cuenta que el activo fue realizado de manera ordenada y profesional y con los recursos recibidos se atendieron los créditos con vocación de pago, de lo que da cuenta la siguiente memoria

(i) Apertura proceso de liquidación judicial:

Mediante auto 610-003365 de 15 de noviembre de 2018, este Despacho decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial**, en los términos de la ley 1116 de 2006 y nombro como liquidador al doctor John De Jesús Suaza Chalarca.

El liquidador se posesionó el 10 de diciembre de 2018, como consta en el Acta 610-000444 de dicha fecha.

(ii) Calificación y graduación de créditos, Derechos de Voto, e inventario valorado

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006, el liquidador con escritos radicados con números 2019-02-007788 y 2019-02-011430 de 26 de marzo y 16 de mayo de 2019, presentó el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario valorado de bienes de la sociedad concursada.

De los documentos mencionados, se corrió traslado a las partes (610-000189 de 21 de mayo de 2019) para los fines previstos en el artículo 39 de la Ley 1116 de 2006, entre el 22 y 28 de mayo de 2019, termino en el cual se presentaron objeciones de las cuales se corrió traslado a los interesados (610-000226 del 12 de junio de 2019) entre el 13 y 17 de junio de 2019.



Mediante dictado en Audiencia de resolución de objeciones, según Acta 610-000296 del 22 de agosto de 2019, este Despacho aprobó el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto e informe de inventario valorado de bienes de la sociedad concursada.

(iii) Honorarios definitivos

Respecto de los honorarios de la liquidación, en atención a la insuficiencia de activos de la concursada, los mismos serán pagados por subsidio. Dichos honorarios fueron fijados en Auto 610-002190 de 4 de octubre de 2019.

(iv) Adjudicación de bienes

La sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial**, según certificación aportada con radicado 2019-02-007788 del 26 de marzo de 2019, carece de activos, razón por la cual no hay lugar a adjudicación alguna.

(v) Rendiciones de cuentas de gestión del liquidador

Previo a la rendición final de cuentas de gestión del liquidador, y conforme a lo dispuesto en la Circular Externa 01 de 2010, en armonía con el artículo 5° de la Ley 1116 de 2006, el Despacho se pronunció respecto de los diferentes informes financieros de periodos intermedios y de fin de ejercicio presentados por el auxiliar de justicia.

(vi) Terminación del proceso

De los antecedentes expuestos, advierte el Despacho que el proceso de liquidación judicial se desarrolló con apego a lo dispuesto en las leyes que lo rigen y, en consecuencia, se estima jurídicamente procedente declarar terminado el proceso liquidatorio, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 63 de la Ley 1116 de 2006.

En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Medellín en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

Primero. Desestimar la objeción presentada por el apoderado de Colpensiones a la rendición final de cuentas por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.

Segundo. Aprobar el informe final de rendición de cuentas de gestión con corte al 30 de agosto de 2019, presentada por el doctor John De Jesús Suaza Chalarca, en calidad de liquidador del patrimonio de la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial** de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente auto

Tercero. Dado que los estados financieros y el informe de rendición de cuentas de gestión con corte al 30 de agosto de 2019 están certificados por un profesional de la contaduría, el Despacho entiende con esta refrendación que se han tenido en cuenta todos los aspectos fiscales inherentes a la sociedad en liquidación.

Cuarto. Declarar terminado el proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial**.



Quinto. Advertir al liquidador de la sociedad concursada que será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión respecto de efectuar los descuentos que corresponda sobre los diferentes conceptos de pagos de retenciones tributarias y trasladar dichas sumas al ente correspondiente, cuando sea el caso.

Sexto. Ordenar si fuera del caso, el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes de la concursada.

Octavo. Ordenar a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor que proceda a inscribir el presente auto, cancelar la matrícula mercantil, levantar las medidas cautelares y cancelar los gravámenes frente a los establecimientos de comercio y razón social, registrados de la concursada cuando sea el caso.

Noveno. Ordenar al liquidador que informe al Despacho sobre las acciones tendientes a la cancelación del registro único tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Décimo. Archivar el expediente del proceso liquidatorio de la sociedad **Transportes Metroentregas S.A. en Liquidación Judicial.**

Notifíquese y Cúmplase

CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ

Intendente Medellín

TRD: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACION JUDICIAL
A0515